JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 110013103008 2016-00158 00

Con el fin de dar impulso al trámite procesal pertinente y teniendo en cuenta que en esta misma data se resolvió un recurso de reposición frente al auto de fecha 16 de febrero de 2021, se fija nueva fecha para la continuación de la audiencia prevista en el artículo 35 de la ley 1116 de 2006 el día 12 del mes de abril del año 2021 a las 2:30 pm, la cual ha de realizarse a través de la plataforma Office 365 Microsoft TEAMS, por lo que en fecha anterior a la diligencia se les compartirá el link de ingreso a la audiencia. Las partes e intervinientes deberán atender todas las recomendaciones señaladas para la realización de la audiencia a la cual pretende dársele continuidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la ley 1116 de 206, se requiere a la Promotora para que en la audiencia a la que se alude en el inciso anterior presente el Acuerdo de Reorganización conforme a lo previsto en la Ley mencionada, con la aprobación de los acreedores reconocidos en este asunto y siguiendo cada una de las directrices señaladas por el Despacho tanto en la audiencias realizadas el 14 de agosto de 2019, el 11 de febrero de 2021 y en auto de esta misma data. Se advierte a la Promotora, a la comerciante en reorganización y a los acreedores que, atendiendo lo previsto en el artículo 35 de ley 1116 de 2006, *“será reanudada la audiencia de confirmación, en la cual se emitirá el fallo, que no será susceptible de recurso alguno. **No presentado o no confirmado el acuerdo de reorganización, el juez ordenará la celebración del acuerdo de adjudicación, mediante providencia en la cual fijará la fecha de extinción de la persona jurídica, la cual deberá enviarse de oficio para su inscripción en el registro mercantil**”.* (Subrayas del Despacho)

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA

JUEZ

ORIGINAL FIRMADO

(2)

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. 4 DE MARZO DE 2021_ Notificado por anotación en ESTADO No. 032 de esta misma fecha La Secretaria, SANDRA MARLEN RINCÓN CARO</p>

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 110013103008 **2016-00158** 00

Procede el Despacho a decidir el recurso de reposición y subsidiario de apelación promovido por la apoderada de Luisa Fernanda García contra el auto de fecha 16 de febrero de 2021 por medio del cual se emitió pronunciamiento sobre la “*SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE ERRORES*” elevada por la Promotora Alexandra Salazar Salazar.

Como fundamento del recurso la apoderada del extremo actor adujo que el derecho a voto de la persona natural comerciante, previsto en el artículo 38 de la ley 1116 de 2006 no es un asunto susceptible de pacto en contrario, por lo que la única alternativa es aplicar la norma en mención, siendo así imposible que el Juez “*mutile*” el derecho del acreedor interno. Preciso también que el Juez está obligado a corregir los errores que se adviertan en el trámite procesal.

En lo que respecta a la exclusión de los acreedores Blanca Rocío Rodríguez Orjuela, María Angélica López Salamanca y Ricardo Rojas Pardo señaló que sí fueron aportados los estados financieros que contenían dichos créditos, documentales que gozan de plena legitimidad; además, señaló, que contrario a lo aducido en el auto objeto de censura, quien entra en insolvencia adelanta un proceso “*RECUPERATORIO*” por lo que sí puede continuar adquiriendo obligaciones.

Surtido el traslado de rigor la apoderada del acreedor Banco BBVA adujo que ninguno de los argumentos formulados busca la revocatoria del auto calendado 16 de febrero mediante el cual se fijó fecha para la continuación de la audiencia prevista en el Art. 35 de la Ley 1116 de 2006 el 8 de Marzo de 2021 y se requirió a la promotora para que en audiencia presente el ACUERDO DE REORGANIZACION conforme a las directrices señaladas en audiencias llevadas a cabo el 14 de agosto de 2019 y 11 de febrero de 2021.

Señaló que la apoderada de la deudora pretende revivir etapas y oportunidades ya fenecidas al interior del proceso, lo cual ya le había sido advertido en providencia del 3 de julio de 2020.

CONSIDERACIONES

De conformidad con los argumentos expuestos por la apoderada de la persona natural en insolvencia, corresponde al Despacho establecer si es esta la oportunidad procesal pertinente para establecer lo referente al derecho de voto del acreedor interno y para debatir sobre la exclusión de acreencias. De ser así, corresponderá proceder con el estudio de fondo de cada uno de los temas señalados por la recurrente.

En primer lugar debe señalarse que el auto objeto de censura tuvo origen en una solicitud de *“corrección de errores”* formulada por la promotora designada dentro del presente asunto, sin que dicha solicitud hubiera sido coadyuvada por la aquí recurrente, razón por la cual resulta reprochable que sea hasta este estado del proceso y una vez fijada la fecha para la continuación de la audiencia de que trata el artículo 35 de la ley 1116 de 2006, que la memorialista presente sus reparos cuando no aludió a ellos en las audiencias que han sido adelantadas por este Despacho.

Aunado a lo anterior y para resolver el problema jurídico planteado ha de establecerse que no es a través de autos que se define quienes tienen voto y cuáles son las acreencias reconocidas, pues para tal fin la ley 1116 de 2006 en sus artículos 24, 29, 30,31 y 35 ha establecido un procedimiento claro en el que una vez es presentado, por parte de la promotora, el Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Derechos de Voto, deben realizarse dos audiencia una para presentar y decidir las objeciones que existieren y otra para confirmar el acuerdo. Téngase en cuenta que una vez surtidas estas etapas, si el proyecto no es presentado o no es confirmado, el juez ordena la celebración del acuerdo de adjudicación, mediante providencia en la cual fija la fecha de extinción de la persona jurídica.

Ahora, de acuerdo con lo anterior, no es posible afirmar que este despacho vulnere el derecho de defensa de la persona en insolvencia cuando en este asunto no se ha culminado la audiencia de que trata el artículo 35 de la ley 1116 de 2006 y cuando se ha instado a la Promotora para que presente el Acuerdo conforme a las reglas legales; no obstante, tampoco puede perder de

vista la recurrente que el proyecto de graduación de créditos y derechos de voto emana del deudor y así los establece el artículo 24 de la ley 1116 de 2006 al prescribir: *“Para el desarrollo del proceso, el deudor deberá allegar con destino al promotor un proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el cual estén detalladas claramente las obligaciones y los acreedores de las mismas, debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los términos del Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen o adicionen”*. Luego, si la persona en insolvencia no pretendía ser reconocida como acreedora interna es un asunto que dependía de su voluntad y que no debía ser presionado por el Juzgado; pero si pretendía serlo, lo que debió hacer fue incluir su acreencia y su derecho de voto en el proyecto que le remitió a la promotora, quien además debió discutirlo con los demás acreedores, sin que hay lugar a pretender que a través de una aclaración y fuera de la audiencias previstas por la ley se superen las omisiones presentadas en el proyecto mencionado.

Téngase en cuenta que este tampoco es el escenario para discutir lo referente a la exclusión de los acreedores Blanca Rocío Rodríguez Orjuela, María Angélica López Salamanca y Ricardo Rojas Pardo, pues como se señaló en el auto recurrido, este fue un punto objeto de decisión en la audiencia que prevé el artículo 30 de la ley 1116 de 2006, realizada el 14 de agosto de 2019 y que respecto de la decisión de exclusión no fue presentado ninguno de los recursos de ley.

Con todo, debe reiterar el Despacho que en la contabilidad presentada para la admisión del proceso de reorganización, la cual debe ser anterior a tres años, no existe registro alguno de obligaciones con las mencionadas personas naturales y que los acreedores Blanca Rocío Rodríguez Orjuela, María Angélica López Salamanca y Ricardo Rojas Pardo no se hicieron presentes en este asunto y los pagarés que debieron soportar dichas obligaciones tampoco fueron aportados, razones suficientes para excluirlos del proyecto de graduación de créditos. De otro lado, aunque la memorialista aludió a la intención de recuperación económica de su representada que la llevó a continuar celebrando mutuos, en el expediente no está clara tal finalidad y no existe certeza si se cumplió o no con lo ordenado en el artículo 19 de la ley 1116 de 2006 en el que se indica que quien entra en reorganización solo puede continuar con el giro normal de sus negocios y no posible que para tal fin se asuman acreencias por

sumas superiores a las de que aquellos acreedores que se hicieron presentes desde el comienzo del trámite de reorganización.

Así las cosas al desvirtuarse cada uno de los argumentos expuestos por la recurrente, se mantendrá incólume la providencia de fecha 16 de febrero de 2021. Además, teniendo en cuenta que la ley 1116 de 2006 no prevé el recurso de apelación para este tipo de trámites, se negará la concesión de la alzada.

En virtud de lo expuesto, el Juzgado,

RESUELVE

PRIMERO: NO REPONER y en consecuencia **MANTENER INCÓLUME** el auto de fecha 16 de febrero de 2021, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NEGAR, por improcedente, la concesión del recurso de apelación interpuesto en subsidio del recurso de reposición que aquí se decide.

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA
JUEZ
ORIGINAL FIRMADO
(2)

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. 4 DE MARZO DE 2021_ Notificado por anotación en ESTADO No. 032 de esta misma fecha La Secretaria, SANDRA MARLEN RINCÓN CARO</p>

DP

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 110013103008 2019 00 032 00

EN aras de continuar con el trámite procesal pertinente se fija fecha para la realización de la audiencia de que trata el numeral 4º del artículo 379 del C.G.P. el día 24 del mes de junio del año 2021 a las 2:30 pm, la cual ha de realizarse a través de la plataforma Office 365 Microsoft TEAMS, por lo que en fecha anterior a la diligencia se les compartirá el link de ingreso a la audiencia.

En tal orden de ideas, se requiere a los abogados intervinientes en este asunto, para que en el término de los 30 días siguientes contados a partir de la notificación por estado de esta providencia, si aún no lo hubieren hecho, procedan a informar sus correos electrónicos y los de sus representados con el fin de garantizar la participación en las audiencia virtual que ha de realizarse en este proceso.

Así mismo, se advierte que todos los sujetos que deban intervenir en la audiencia deberán conectarse al link suministrado con por lo menos 30 minutos de anticipación a la hora señalada con el fin de realizar las pruebas técnicas pertinentes; además, durante el desarrollo de la audiencia deberán exhibir la documentación de identificación personal y profesional en formato original y seguidamente remitir a través del correo institucional una copia de dichos documentos para que obren en el plenario.

De igual forma, será deber de cada apoderado comunicar a su poderdante, y testigos el día y la hora en que se realizará la audiencia programada en este asunto y el objeto de la misma. También instruirlos sobre sus deberes, formalidades de la diligencia y el deber de exhibir su documento de identificación en formato original.

Se advierte a los apoderados intervinientes que en aras de implementar en debida forma la justicia digital, será de su responsabilidad dotarse y garantizar a sus representados y testigos el acceso a los medios tecnológicos suficientes con el fin de comparecer virtualmente a la audiencia.

Téngase en cuenta que, de resultar necesario, los intervinientes en la audiencia deberán acudir a las alcaldías, a las personerías municipales y demás entidades públicas habilitadas por la Constitución y la Ley, entre ellas los consultorios jurídicos, para brindar apoyo técnico y tecnológico en la realización de las diligencias judiciales en las que los sujetos procesales deban presentarse.

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA
JUEZ
ORIGINAL FIRMADO
(2)

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. 4 DE MARZO DE 2020__ Notificado por anotación en ESTADO No. __32__ de esta misma fecha La Secretaria, SANDRA MARLEN RINCÓN CARO</p>

DP

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Ref.: 110013103008002019-0032

Procede el Despacho a decidir el incidente de nulidad formulado por la apoderada de los demandados Saúl Alberto Garzón Arévalo y Marco Alcides Garzón Arévalo. En su sentir, en el *sub-lite* se configuró la causal consagrada en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso, comoquiera que los citatorios y avisos enviados a sus representados se remitieron a la dirección calle 102ª No. 70b – 21 de Bogotá, sin que los mencionados demandados fueron debidamente notificados, toda vez que el señor Saúl Alberto Garzón Arévalo desde su nacimiento vive en la vereda Boquerón del municipio de Chocontá (Cundinamarca) y el señor Marco Alcides Garzón Arévalo reside desde hace más de diez años en el municipio de Paratebueno (Cundinamarca). La apoderada también desatacó que la persona que recibió las mencionadas comunicaciones de notificación no impuso firma alguna, lo cual indica que sus representados no fueron notificados.

Mediante sendos autos de fecha 25 de enero y 2 de febrero de 2021 se ordenó correr traslado al extremo demandante de la nulidad formulada y resolvió lo pertinente respecto del decreto de pruebas.

Surtido el traslado de rigor, la parte demandante ratificó que la dirección de notificaciones de los mencionados demandados es la calle 102ª No. 70b – 21 de Bogotá y destacó que *“probablemente los documentos aportados pretendiendo probar los lugares de residencia de Saúl Alberto en el municipio de Chocontá y Marco Alcides Garzón Arévalo en el municipio de Paratebueno sean verídicos, pero esta circunstancia no PRUEBA que su domicilio principal NO sea”* la dirección aludida

Aunado a lo anterior el extremo demandante adujo que la dirección en la que fueron notificados los demandados corresponde a la misma dirección en la que se notificaron en el proceso divisorio que cursó en el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá bajo el radicado No.2017-541. Situación que fue omitida por la misma apoderada que actúa en este asunto, quien en dicha oportunidad no presentó nulidad alguna.

Finalmente, solicitó que se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue lo pertinente *“dada la GRAVEDAD DE LAS ACUSACIONES, de cuyas afirmaciones sin fundamento jurídico-fáctico se desprenderían DELITOS CONEXOS contra el buen nombre y la honra del suscrito abogado”*.

CONSIDERACIONES

Los motivos generadores de nulidad están instituidos en el artículo 133 del Código General del Proceso y en esencia *“tienden a corregir las irregularidades*

ocurridas en la litis, a fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, para lograr el cumplimiento del objetivo confiado por la ley”¹.

Ahora, conviene recordar que, conforme a lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 133 *ibíd*, un juicio es nulo en todo o en parte, cuando:

“(...) no se practica en legal la forma notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado (...).”

El anterior precepto busca asegurar que la persona que se demanda sea indudablemente enterada de la actuación en su contra, para que se vincule al proceso y ejerza su derecho de defensa, lo que sin lugar a dudas reviste gran importancia, puesto que mal podría dictarse una sentencia en contra de quien no fue convocado y que por lo mismo desconoce el contenido del pliego introductor, del fallo adverso y de los recursos otorgados por la ley. Luego, obviar las formalidades que entraña la aludida diligencia, establecida en los artículos 290 a 293 del C.G.P., da lugar al referido vicio.

En consonancia con lo expuesto, debe señalarse que en el caso concreto y una vez revisado el plenario se advierte que a folios 138, 142, 192 y 207 obran las respectivas certificaciones emitidas por la empresa de mensajería Ltda. Express en las que consta que en la dirección calle 102ª No. 70b – 21 fueron recibidos los citatorios y los avisos de notificación de los demandados Saúl Alberto Garzón Arévalo y Marco Alcides Garzón Arévalo. Téngase en cuenta que los citatorios fueron recibidos por la señora María Olga Guzmán quien manifestó que los mencionados señores sí residían en la mencionada dirección y que si bien los avisos no figura el nombre de quien recibió los documentos, lo cierto es que esto obedeció a que quien recibió los avisos manifestó que no firmaría el recibido, pero no hizo alusión alguna que desconociera a los demandados mencionados. En otras palabras, la documental que obra en el expediente da cuenta que los demandados Saúl Alberto Garzón Arévalo y Marco Alcides Garzón Arévalo fueron notificados en la forma prevista en los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso.

Ahora bien, le asiste razón al apoderado del extremo demandante al señalar que el hecho que los demandados residan en los municipios de Chocontá y Paratebuena, en sí mismo, no excluye que tengan su domicilio en la calle 102ª No. 70b – 21 de Bogotá menos aún si se tiene en cuenta que ese es uno de los inmuebles respecto de los cuales la aquí demandante solicita que se le rinda cuentas por los frutos que ha producido y que supuestamente han recibido los aquí demandantes. Nótese además, en el folio de matrícula No.50N-20309157 correspondiente al inmueble ubicado en la mencionado

¹ Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Auto de 21 de noviembre de 2012. Exp. 11001310302420070023802.

dirección, en las anotaciones No. 2 y No.6 está acreditado que en virtud de la adjudicación en sucesión que hiciera el Juzgado 20 de Familia los demandados Saúl Alberto Garzón Arévalo y Marco Alcides Garzón Arévalo adquirieron parte de la propiedad de dicho bien; además, se advierte que los mencionados señores también fueron demandados en un proceso divisorio que se surtió en el Juzgado 32 Civil del Circuito, trámite procesal en el que las notificaciones, por su naturaleza, se surten en el inmueble objeto de división, circunstancias estas que indican que los demandados sí tienen posibilidad de recibir correspondencia en la dirección en la que fueron notificados, razón por la cual en el caso concreto la nulidad invocada no está probada.

Por lo expuesto, se negará la nulidad invocada. De otro lado, en lo que respecta a la solicitud de compulsión de copias elevada por el apoderado del extremo demandante debe señalársele al memorialista que en el presente asunto no existen elementos probatorios suficientes para proceder de tal forma; sin embargo, el solicitante está en libertad de acudir directamente ante las autoridades respectivas para promover las acciones penales que a bien tenga.

En mérito de lo discurrido, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad propuesta por la apoderada de los demandados Saúl Alberto Garzón Arévalo y Marco Alcides Garzón Arévalo, por las razones expuestas.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a los incidentantes, fijando como agencias en derecho la suma de \$800.000,00 mcte.

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA
JUEZ
ORIGINAL FIRMADO
(2)

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. ___4 de marzo de 2021___ Notificado por anotación en ESTADO No. ___32___ de esta misma fecha La secretaria, SANDRA MARLEN RINCÓN CARO</p>

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 110013103008 2020-0023400

Reunidos como se encuentran los requisitos de los artículos 422 y 306 del Código General del Proceso, el juzgado

RESUELVE:

1) Librar mandamiento de pago en contra de los señores GERMÁN ALBERTO CARDONA ARISTIZABAL y JAIME ALBERTO MERCADO CEPEDA y a favor de LA DESCENDENCIA S.A.S. por las siguientes sumas:

1.1 Por el capital contenido en el pagaré No.7 aportado digitalmente con la demanda, correspondiente a doscientos millones de pesos m/cte (\$200.000.000).

1.2 Por los intereses moratorios de la obligación contenida en el numeral anterior, liquidados a la tasa máxima fluctuante certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde el 1º de agosto de 2020 hasta cuando se verifique el pago efectivo de la totalidad de la obligación.

2) Sobre costas y agencias en derecho se resolverá oportunamente.

3) NOTIFICAR esta providencia a la parte demandada en la forma y términos establecidos en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, advirtiéndole que cuenta con cinco (5) días para pagar o diez (10) días para excepcionar según lo determine, los cuales corren simultáneamente.

4) RECONOCER personería para actuar al abogado Jorge Lucas Tolosa Zambrano como apoderado judicial de la parte demandante, en la forma, términos y para los efectos del poder conferido.

5) OFICIAR a la Administración DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –DIAN-, de conformidad con el artículo 630 del Estatuto Tributario

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA
JUEZ

ORIGINAL FIRMADO

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. 4 de marzo de 2021__ Notificado por anotación en ESTADO No. <u>031</u> de esta misma fecha La Secretaria, SANDRA MARLEN RINCON CARO</p>
--

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 1100131030082020-0023400

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por la parte actora, así como reunidos los requisitos del artículo 599 del Código General del Proceso, el juzgado

DECRETA:

1. El embargo retención de los dineros que los demandados GERMÁN ALBERTO CARDONA ARISTIZABAL y JAIME ALBERTO MERCADO CEPEDA posean en las cuentas de las entidades bancarias enlistadas en el escrito de cautelas. Límitese la medida a \$450.000.000. Ofíciase.
2. El embargo del inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria Número 50C-1349980 de Bogotá, denunciado como de propiedad del demandado GERMÁN ALBERTO CARDONA ARISTIZABAL.
3. El embargo del inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria Número 307-30806 de Girardot (Cundinamarca), denunciado como de propiedad del demandado JAIME ALBERTO MERCADO CEPEDA.

Se limitan las medidas a las aquí deprecadas; sin perjuicio de que con posterioridad y de ser necesario se amplíe el decreto. Una vez acreditado el embargo de los inmuebles, se resolverá sobre su secuestro.

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA
JUEZ
ORIGINAL FIRMADO
(3)

<p style="text-align: center;">JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. __4 de marzo de 2021__ Notificado por anotación en ESTADO No. __032__ de esta misma fecha La Secretaria,</p> <p style="text-align: center;">SANDRA MARLEN RINCÓN CARO</p>
--

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Bogotá, tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 11001310300802020-023400

Procede el Despacho para decidir el recurso de reposición y subsidiario de apelación promovido contra el auto de fecha 20 de octubre de 2020 por medio del cual se negó la orden de mandamiento de pago por considerar que el documento aportado como base de ejecución no contiene una fecha de exigibilidad para la obligación que contiene, pues el espacio destinado para ello se encuentra en blanco.

Como fundamento del recurso impetrado la parte demandante adujo que si bien el cuerpo del pagaré base de la ejecución tiene un espacio en blanco; también debe considerarse *“que en la decisión impugnada se incurrió en error durante la calificación de la demanda toda vez que se afirma que el título aportado no tiene fecha de exigibilidad de la obligación crediticia en él contenida y con ello desconoce que el espacio en blanco, antecedido por la expresión “FECHA DE VENCIMIENTO:” que consta en la parte superior del documento base de la ejecución, si se encuentra diligenciado y en él se indica, conforme a las instrucciones otorgadas por el endosante, la fecha real, cierta y expresa de vencimiento de la obligación”*.

CONSIDERACIONES

De conformidad por lo expuesto por la parte recurrente corresponde al Despacho establecer si el pagaré No.07 aportado como base de la ejecución contiene una fecha de exigibilidad o no.

Una vez revisado el pagaré No. 7 y sin entrar en mayores consideraciones se advierte que le asiste razón al recurrente, toda vez que en la parte superior del mencionado título valor se incluyó la fecha de vencimiento de la obligación en el incorporada, de forma tal que el mencionado pagaré sí contiene un obligación clara, expresa y actualmente exigible.

Por lo expuesto, se revocará el auto de fecha 20 de octubre de 2020 y en auto de esta misma data se resolverá lo referente al mandamiento de pago solicitado.

RESUELVE

PRIMERO: REPONER y en consecuencia **REVOCAR** el auto de fecha 20 de octubre de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: En auto de esta misma data procédase a resolver lo atiente a la orden de mandamiento de pago.

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA

JUEZ

ORIGINAL FIRMADO

(3)

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. 4 de marzo de 2021__ Notificado por anotación en ESTADO No. 32 de esta misma fecha La Secretaria, Sandra Marlen Rincón Caro</p>
--

DP

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 110013103008 **2020-0024300**

Comoquiera que la parte actora no dio cabal cumplimiento a lo ordenado en auto del 28 de octubre de 2020, toda vez que no aportó el histórico de pagos requerido, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR la presente demanda de conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Código General del Proceso.

SEGUNDO: DEJAR las constancias de Ley. Secretaría proceda de conformidad.

Notifíquese,

**ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA
JUEZ**

ORIGINAL FIRMADO

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. __4 MARZO DE DE 2021__ Notificado por anotación en ESTADO No. __32__ de esta misma fecha La Secretaria, SANDRA MARLEN RINCÓN CARO</p>

DP

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 2021-00043

Del estudio preliminar de las presentes diligencias y en particular de la revisión de la Factura de Venta allegadas como base de la acción ejecutiva que se pretende instaurar, se observa que la mismas no reúne en su totalidad los requisitos exigidos por los artículos 773 y 774 del Código de Comercio, modificados por los artículos 2° y 3° de la Ley 1231 del año 2008 y Decreto 3327 del 03 de septiembre de 2009, para ostentar la calidad de Título Valor, pues no cumple con lo atinente a la aceptación expresa o tácita de las facturas según lo establecido en los artículos 4° y 5° del Decreto 3327/2009. Nótese que en la factura se señala en forma expresa que “EL RECIBO DE ESTE DOCUMENTO NO IMPLICA ACEPTACIÓN”, por tal evento no es viable librar la orden de pago deprecada, conforme al artículo 422 del Código General del Proceso, pues el documento allegado como título ejecutivo adolece de aceptación expresa o tácita por parte de la sociedad aquí demandada.

Por lo brevemente expuesto, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el pretendido mandamiento de pago.

SEGUNDO: ORDENAR la devolución de la demanda y sus anexos a quien la presentó, sin necesidad de desglose.

TERCERO: DESANOTAR el asunto y dejar constancia de su entrega.

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA
JUEZ
ORIGINAL FIRMADO

DAJ

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. <u>4 de marzo de 2021</u> Notificado por anotación en ESTADO No. <u>32</u> de esta misma fecha La Secretaria,</p> <p style="text-align: center;">SANDRA MARLEN RINCÓN CARO</p>

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 2021-00044

Inadmítase la anterior demanda so pena de rechazo de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Código General del Proceso, para que la demandante, dentro del término de cinco (5) días posteriores a la notificación de este auto, la subsane en los siguientes aspectos:

1. De conformidad con el artículo 5° del Decreto 806 de 2020, ratifíquese por el poderdante de la demandante el poder allegado al expediente, remitiendo aquel a través de la dirección de correo electrónico institucional del poderdante o de ser el caso remitiendo una copia con presentación personal de aquel; además, téngase en cuenta que el poder que se aporte deberá contener el correo electrónico de notificaciones judiciales del apoderado.
2. Aclárense las pretensiones de la demanda, de modo que se distingan las pretensiones declarativas, las consecuenciales y las condenatorias debidamente liquidadas, así como las pretensiones principales y subsidiarias, últimas que deberán tener también debidamente liquidadas sus pretensiones condenatorias. Véase que la pretensión primera simplemente solicita que se declare la nulidad relativa del contrato OTROSI fechado el 27 de febrero de 2013, no obstante no se determina la consecuencia que ha de seguirse respecto a esta declaración y conforme a las posibilidades descritas en el artículo 1746 del C.C.; en caso de optarse por restituciones mutuas deberán liquidarse aquellas y realizar el juramento estimatorio de que trata el artículo 206 del C.G.P.
3. Acredítese debidamente el agotamiento del requisito de procedibilidad establecido por la ley 640 de 2001, respecto de la aquí demandante y con la demandada, como es allegando la solicitud de conciliación presentada ante la Procuraduría General de la Nación.
4. De conformidad con el artículo 6 del Decreto 806 de 2020, acredítese haber efectuado la remisión de la demanda y sus anexos a la accionada.
5. De conformidad con el numeral 5 del artículo 82 del C.G.P., describáense los hechos de la demanda debidamente determinados, clasificados, numerados y que resulten legibles; véase que varios de los pies de página incorporados en la demanda no resultan ordenados, ni hacen parte de los hechos base de esta acción.
6. Adecúese el escrito de la demanda en los términos ordenados en los numerales 2° y 10° del artículo 82 *ibidem.*, así como al artículo 3° del Decreto 806 de 2020, indicando la dirección física y de correo electrónico de notificación de cada una de las partes, testigos, peritos y demás sujetos que deban comparecer a las audiencias programadas en este asunto.

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA
JUEZ
ORIGINAL FIRMADO

DAJ

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. <u>4 de marzo de 2021</u> Notificado por anotación en ESTADO No. <u>32</u> de esta misma fecha La Secretaria, SANDRA MARLEN RINCÓN CARO</p>

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 2021-00046

Inadmítase la anterior demanda so pena de rechazo de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Código General del Proceso, para que la demandante, dentro del término de cinco (5) días posteriores a la notificación de este auto, la subsane en los siguientes aspectos:

1. Intégrese la litis con todos los intervinientes dentro de la compraventa elevada a escritura pública No. 3716 del 16-11-2016 NOTARIA TREINTA Y NUEVE de BOGOTA D. C., incluyendo para el efecto como demandado a INVERSIONES GARCIA VANEGAS Y CIA. S.EN C.
2. Concomitante con lo anterior, de conformidad con el artículo 5° del Decreto 806 de 2020, alleguese un poder especial en el que se faculte demandar a la sociedad INVERSIONES GARCIA VANEGAS Y CIA. S.EN C..
3. Alleguese el certificado de existencia y representación legal de INVERSIONES GARCIA VANEGAS Y CIA. S.EN C..
4. Adecúese el escrito de la demanda en los términos ordenados en los numerales 2° y 10° del artículo 82 *ibidem.*, así como al artículo 3° del Decreto 806 de 2020, indicando la dirección física y de correo electrónico de notificación de cada una de las partes, testigos, peritos y demás sujetos que deban comparecer a las audiencias programadas en este asunto.

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA
JUEZ
ORIGINAL FIRMADO

DAJ

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. <u>4 de marzo de 2021</u> Notificado por anotación en ESTADO No. ____32____ de esta misma fecha La Secretaria,</p> <p style="text-align: center;">SANDRA MARLEN RINCÓN CARO</p>
--

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 2021-00049

Inadmítase la anterior demanda so pena de rechazo de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Código General del Proceso, para que la demandante, dentro del término de cinco (5) días posteriores a la notificación de este auto, la subsane en los siguientes aspectos:

1. Alléguese una copia legible de los documentos aportados con la demanda; véase que la escritura publica No. 1353 del 8 de marzo de 2011 fue aportada de tal forma cuya lectura no resulta posible en algunos apartes.
2. Alléguese el histórico de pagos y la aplicación de los mismos respecto a cada una de las obligaciones objeto de cobro judicial; de ser el caso adecúense las pretensiones, mes a mes y conforme al reporte que se aporte.
3. De conformidad con el artículo 8 del Decreto 806, infórmese la forma como obtuvo la dirección de correo electrónico de la ejecutada y alléguese las evidencias correspondientes.
4. De conformidad con el artículo 245 del C.G.P., afírmese bajo la gravedad de juramento las razones por las que no aportó el título valor base de esta acción en físico, así como declare que tiene en su poder dicho documento y que no ha iniciado proceso ejecutivo paralelo al que aquí se adelanta.

Se advierte al demandante y a su apoderado que conforme al numeral 12° del artículo 78 del C.G.P. y de acuerdo con el principio de buena fe y lealtad procesal, el título valor base de esta acción deberá conservarse bajo su custodia y responsabilidad hasta tanto se programe por la secretaria del juzgado la cita para la entrega formal del documento y se haga la misma, o hasta tanto el juez exija su exhibición, so pena de hacerse acreedor de la responsabilidad patrimonial de que trata el artículo 80 del C.G.P. y demás sanciones disciplinarias que contempla el C.G.P.

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA
JUEZ
ORIGINAL FIRMADO

DAJ

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. <u>4 de marzo de 2021</u> Notificado por anotación en ESTADO No. <u>32</u> de esta misma fecha La Secretaria,</p> <p style="text-align:center">SANDRA MARLEN RINCÓN CARO</p>

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 2021-00051

Inadmítase la anterior demanda so pena de rechazo de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Código General del Proceso, para que la demandante, dentro del término de cinco (5) días posteriores a la notificación de este auto, la subsane en los siguientes aspectos:

1. Indíquese con claridad el tipo de acción ejecutiva que se inicia; si es singular o el de la efectividad real de la garantía, teniendo en cuenta que en la demanda se establece que lo intentado es un proceso ejecutivo singular, sin embargo se menciona que la deuda fue garantizada con una garantía prendaria constituida sobre 4 vehículos; Téngase en cuenta que las medidas cautelares ajenas a la garantía prendaria concedida, solamente podrá ser tenidas en cuenta si con el producto del remate del bien dado en garantía no se extingue la obligación objeto de cobro. (art. 468 No. 5 del C.G. del P.)
2. Concomitante con lo anterior, indíquese las razones por las que aporlo la garantía prendaria constituida sobre el vehículo de placas TL7378 y apórtese la garantía prendaria sobre el vehículo de placas ODO06E, de ser el caso háganse las correcciones de digitación pertinentes en el libelo genitor.
3. Alléguese el Registro Único Nacional de Transito de los vehículos objeto de prenda, cuya fecha de expedición no sea mayor a 30 días y en el que conste la inscripción de la garantía prendaria.
4. Alléguese el poder especial otorgado para iniciar esta acción ejecutiva.
5. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 85 del C. G. del P, y en el literal a. del numeral 6º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, apórtese certificado de existencia y representación legal del banco demandante expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia
6. De conformidad con el artículo 8 del Decreto 806, infórmese la forma como obtuvo la dirección de correo electrónico de la ejecutada y alléguese las evidencias correspondientes.
7. De conformidad con el artículo 245 del C.G.P., afírmese bajo la gravedad de juramento las razones por las que no aportó el título valor base de esta acción en físico, así como declare que tiene en su poder dicho documento y que no ha iniciado proceso ejecutivo paralelo al que aquí se adelanta.

Se advierte al demandante y a su apoderado que conforme al numeral 12º del artículo 78 del C.G.P. y de acuerdo con el principio de buena fe y lealtad procesal, el título valor base de esta acción deberá conservarse bajo su custodia y responsabilidad hasta tanto se programe por la secretaria del juzgado la cita para la entrega formal del documento y se haga la misma, o hasta tanto el juez exija su exhibición, so pena de hacerse acreedor de la responsabilidad patrimonial de que trata el artículo 80 del C.G.P. y demás sanciones disciplinarias que contempla el C.G.P.

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA
JUEZ
ORIGINAL FIRMADO

DAJ

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. 4 de marzo de 2021 Notificado por anotación en ESTADO No. ____32__ de esta misma fecha La Secretaria,</p> <p style="text-align: center;">SANDRA MARLEN RINCÓN CARO</p>

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 2021-00053

Comoquiera que la anterior demanda se acompaña de títulos que prestan mérito ejecutivo, los cuales cumplen con las exigencias establecidas en los artículos 422 y 430 del Código General del Proceso el juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: LIBRAR mandamiento ejecutivo de mayor cuantía a favor del SCOTIABANK COLPATRIA S.A., contra JOHN EDUARD DOVAL HAWASLY, por las siguientes sumas:

- 1.1 Por la suma de \$147.427.554,17 por concepto de capital incorporada en el pagaré N° 02-00788198-03
- 1.2 Por los intereses moratorios sobre el capital mencionado en el numeral 1.1, a la tasa máxima legalmente permitida, que corresponde a una y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera para cada período, desde el 11 de diciembre de 2020, y hasta cuando se verifique el pago total de la obligación.
- 1.3 Por la suma de \$ 7.502.806,43 por concepto de los intereses de plazo de la obligación N° 02-00788198-03 contenida en el pagaré.

Sobre costas del proceso y agencias en derecho se resolverá oportunamente.

SEGUNDO: ORDENAR a la parte demandada pagar la obligación aquí ejecutada dentro del término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia y el término de diez (10) días para que excepcione de conformidad con el artículo 442 del Código General del Proceso.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a la demandada en la forma y términos establecidos en el Decreto 806 de 2020, haciéndosele entrega de las copias de la demanda y de sus anexos.

CUARTO: OFICIAR a la ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN, de conformidad con el artículo 630 del Estatuto Tributario.

QUINTO: RECONOCER personería para actuar al abogado LUIS EDUARDO ALVARADO BARAHONA, como apoderado judicial de la parte demandante, en la forma, términos y para los efectos del poder conferido.

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA
JUEZ
ORIGINAL FIRMADO

DAJ

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. <u>4</u> de marzo de 2021 Notificado por anotación en ESTADO No. <u>32</u> de esta misma fecha La Secretaria, SANDRA MARLEN RINCÓN CARO</p>

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 2021-00054

De la lectura del expediente de referencia, que fuere conocido por el juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla bajo el radicado 08-001-31-53-008-2019-00113-00. y que fue remitido a esta sede judicial en razón al auto proferido por el juez de conocimiento el 28 de octubre de 2020, se observa que esta Sede Judicial no es quien debe conocer del proceso de la referencia, razón por la cual se rechazará la misma y se propondrá conflicto de competencia negativo ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, previos los siguientes,

ANTECEDENTES

La demanda obrante bajo el proceso de la referencia tiene como finalidad la expropiación del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-159221 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla.

Ahora bien, una vez revisado el plenario se evidencia que el mencionado Despacho Judicial recaudo todo el material probatorio requerido y estando el proceso para fijar fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 399 del C.G.P., ejerció control de legalidad de la actuación allí adelantada y decidió declarar su incompetencia para conocer del presente asunto, argumentando que la Agencia Nacional de Infraestructura tiene su domicilio en Bogotá, por lo que consideró que quien debe conocer de este asunto es el juez del domicilio de la respectiva entidad, es decir el juez del Circuito de Bogotá.

CONSIDERACIONES

En orden a desatar el problema planteado, en torno a la competencia territorial de esta Sede Judicial, ha de recordarse que el artículo 28 del Código General del Proceso establece que:

“La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas:

7. En los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante.” (subrayado por el Despacho)

Sobre el particular, la Corte ha decidido que el fuero privativo establecido en la antedicha regla “significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial”¹

Entonces, puede concluirse que para casos como el que ahora nos ocupa el legislador dispuso privativamente una competencia territorial, competencia que para el presente caso es la jurisdicción del Municipio de Barranquilla.

Concomitante con lo anterior, el artículo 27 del Código General del Proceso señala expresamente que “la competencia no variara por la intervención sobreviniente de persona que tenga fuero especial” y más adelante dispone que quien comience la

¹Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 16 de septiembre de 2004, Exp. No. 00772-00.

actuación conservará su competencia y por tanto, el juez no podrá variarla o modificarla por factores distintos al de la cuantía que se indica en el inciso segundo de esta norma.

Ahora bien, concretamente sobre la falta de competencia, el tratadista Hernán Fabio López Blanco ha indicado que:

*Se entiende por falta de jurisdicción el hecho de que el proceso sea conocido por una autoridad judicial de rama diferente de la civil, por ejemplo: laboral, contencioso-administrativa, familia, penal, mientras que la falta de competencia se presenta cuando el conocimiento corresponde a autoridad diferente, pero de la misma rama civil (...)*²

Concomitante con lo anterior, la Corte Constitucional ha dicho que:

“Otra consecuencia de la aplicación de este principio – de economía procesal -, es la institución del saneamiento de las nulidades. En el Código, ésta se funda en la consideración de que el acto, aun siendo nulo, cumplió su finalidad. Que, en consecuencia, no se violó el derecho de defensa (...) En virtud de la economía procesal, el saneamiento de la nulidad, en general, consigue la conservación del proceso a pesar de haberse incurrido en determinado vicio, señalado como causal de nulidad”. También consideró la Corte que “(...) dentro de la libertad de configuración del proceso que tiene el legislador, puede considerar que, por haberse prorrogado la competencia, no se ha vulnerado el debido proceso, y puede, por consiguiente, establecer el saneamiento de la nulidad”. Finalmente precisó que “(...) al conservarse la actuación cumplida hasta el momento de declararse la incompetencia, se evitan dilaciones innecesarias”.³

Finalmente, recientemente en un caso idéntico al que hoy nos ocupa, la Corte Suprema de Justicia explicó que:

“2.3. No obstante, el real conflicto surge cuando en ciertas ocasiones la entidad pública, como promotora de la acción decide renunciar al fuero privativo y procede a instaurar la acción en el domicilio del accionado y ubicación del bien, o como en esta ocasión, conforme a las reglas del Artículo 20, numeral 5 del Código General del Proceso.

La Corte ha planteado previamente dicha posibilidad “(...) En virtud de la autonomía de la voluntad se puede declinar la protección derivada de la exención jurisdiccional, con el objeto de promover una acción civil, o para atender una demanda en la que se pretenda su vinculación (...)”⁴. Además, en reciente auto la Corte afirmó “(...) El fuero personal fijado en el numeral 10º del precepto 28 C.G.P., aunque privativo, es –en tesis general– de carácter renunciable. Ello porque, en el fondo, dicha norma no hace sino consagrar un “beneficio” o “privilegio” a favor de la entidad pública, conforme al cual se le autoriza demandar ante el juez del sitio de su propio domicilio, quien deberá avocar el conocimiento del libelo así propuesto. Pero queda mejor perfilada la anotada facultad si se le contempla como expresión de un derecho personalo derecho subjetivo privado, atribuido por el orden jurídico al órgano público o semipúblico en reconocimiento de su propia personalidad, y en atención a su particular modo de ser y obrar.”⁵

2.4. Por lo anterior y en orden a la manifiesta renuncia hecha por el accionante, es evidente a todas luces que además de aplicar el artículo pretendido en la demanda, también lo será el numeral séptimo del artículo 28

² LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Procedimiento Civil Parte General, 9 edición, Dupré Editores, 2005, Pág. 895.

³ Corte Constitucional, sentencia C-537 de 2016.

del CGP, según el cual en los “procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante”.⁴ (Subrayado por el Despacho)

De lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que la falta de competencia es *una inconsistencia procesal* que por sí sola no da lugar a declarar de oficio la incompetencia que hoy se alega, pues incluso se torna en un privilegio renunciable por la entidad pública que es parte dentro de un proceso judicial; Así, tal como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en repetida jurisprudencia *“una vez el juez admite la demanda y acepta su competencia territorial, solo puede desprenderse de ella por el reclamo formal de la parte afectada en la oportunidad procesal dispuesta para tal fin”⁵.*

En tal orden de ideas, estima este juzgador que es el Juzgado Civil del Circuito de Barranquilla, quien debe seguir conociendo de este asunto, pues no solo este caso goza de una competencia privativa en razón al territorio; sino que además el juzgado de conocimiento, sin existir un reclamo formal de la parte afectada, declaró de oficio su falta de competencia, alegando el fuero especial, yendo así en contravía de lo ordenado por los artículos 27 y 28 de la norma en cita.

Por lo discurrido, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO la demanda de la referencia por falta de competencia, de conformidad con el artículo 90 del Código General del Proceso.

SEGUNDO: PROMOVER conflicto negativo de competencias ante la Sala de Casación Civil der la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 139 del Código General del proceso y por los argumentos expuestos.

Por secretaría, remítanse las diligencias.

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA
JUEZ
ORIGINAL FIRMADO

DAJ

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. 4 de marzo de 2021 Notificado por anotación en ESTADO No. ____32____ de esta misma fecha La Secretaria, SANDRA MARLEN RINCÓN CARO</p>

⁴ CSJ Sala de Casación Civil, proceso 11001-02-03-000-2020-02652-00 providencia del 30 de noviembre de 2020. M.P. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

⁵ Véase entre otras, la providencia del 15/03/2017 proferido por la Sala de Casación Laboral dentro del expediente No. 75956, o la proferida por la Sala de Casación Civil el 15/06/2016 dentro del expediente 11001-0203-000-2016-00977-00

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 2021-00055

Del estudio de los documentos aportados con la demanda, que pretenden hacerse valer como base para la ejecución, consistente en el certificado emitido por la Administradora del EDIFICIO VECCO 112 P.H. y el Acta de Asamblea Extraordinaria fechada el 10 de julio de 2019, se concluye que los mismos no cumplen con los requisitos que la ley ha establecido para que sean tenidos como título ejecutivo a favor del accionante.

Al tenor del artículo 422 del Código General del Proceso, es necesario, para proferir mandamiento ejecutivo, que con la demanda se acompañe documento que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible en cabeza del demandante; Circunstancia que aquí no acontece por cuanto las obligaciones incorporadas en certificado emitido el 14 de julio de 2020 no están debidamente discriminadas respecto a cada una de las unidades habitacionales que componen la Propiedad Horizontal y conforme a su índice de propiedad, indicando claramente el Folio de matrícula Inmobiliaria del inmueble sobre el cual se pretende realizar el cobro jurídico.

En efecto, véase que las cuotas extraordinarias deben liquidarse respecto a cada una de las unidades habitacionales, según su coeficiente de copropiedad, por lo que existiendo una pluralidad de bienes, el certificado de que trata el artículo 48 de la LEY 675 de 2001 debe ser expedido respecto a cada inmueble.

Concomitante con lo anterior, se evidencia que la obligación cuyo cobro pretende ejecutarse, no contiene una fecha clara de vencimiento, pues según el acta de Asamblea Extraordinaria realizada el 10 de julio de 2019, se impusieron dos fechas de vencimiento para hacer exigible la obligación que aquí se ejecuta; en efecto, en el numeral 5.1 se estableció que la cuota extraordinaria sería exigible dos años posteriores a la terminación de la obra de que trató la asamblea extraordinaria, mientras que en el numeral 5.9 se fijó como fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2021.

No obstante lo anterior, independiente de cual sea la fecha de vencimiento que decida acoger el ejecutante, lo cierto es que en ninguno de los dos casos ha acaecido la fecha pactada, la primera porque no se acreditó cuando se culminaron las obras y la segunda, por cuanto aun no ha llegado el día establecido en el acta.

Así las cosas, la obligación ejecutada carece del requisito de claridad y exigibilidad requerido en el artículo 422 del C.G.P., por lo que el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: **NEGAR** el pretendido mandamiento de pago.

SEGUNDO: **ORDENAR** la devolución de la demanda y sus anexos a quien la presentó, sin necesidad de desglose.

TERCERO: **DESANOTAR** el asunto y dejar constancia de su entrega.

Notifíquese,

ELSA JANETH BARBOSA VILLALBA
JUEZ
ORIGINAL FIRMADO

DAJ

<p>JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO Bogotá, D.C. <u>4 de marzo de 2021</u> Notificado por anotación en ESTADO No. <u>32</u> de esta misma fecha La Secretaria,</p> <p>SANDRA MARLEN RINCÓN CARO</p>